

**Causa N° 8800/11 “Asociación de Anestesia Analgesia y Reanimación de Bs.
As. s. recurso de queja por recurso directo denegado”**



Buenos Aires, 28 de febrero de 2012.

Por recibidos; agréguese los escritos presentados por la recurrente, como así también la constancia de pago de tasa de justicia y los bonos de derecho fijo, y tiénese presente la autorización conferida.

AUTOS Y VISTOS; CONSIDERANDO:

1. La Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (en adelante la Asociación) interpuso, en los términos del art. 476 del Código Procesal Penal, recurso de queja desde que por Resolución CNDC N° 90/11 (del 11-11-2011; ver copia de fs. 183/88) se denegó la apelación deducida contra la Resolución N° 66/11 (del 24-8-2011; fs. 170/77).

En esa última decisión, la Comisión tuvo por desistida la prueba instrumental, informativa y pericial contable ofrecida por la Asociación al contestar el traslado previsto en el art. 32 de la ley 25.156 (LDC), con fundamento en los arts. 33, 34 y 58 de esa norma y de su decreto reglamentario, como también en los arts. 1 al 6 de la Resolución CNDC N° 5/11 (ver art. 2). Asimismo, decretó la clausura del periodo de prueba y puso la causa para alegar conforme con lo establecido en los arts. 34 y 58 de la LDC (art. 3).

Es oportuno precisar -a fin de resolver sobre la queja deducida- que la denegatoria de la apelación se fundó en el art. 33 de la ley 25.156 en cuanto prevé como única vía recursiva la reposición contra las decisiones sobre prueba. A ello se añadió que la Asociación por un lado presentó en subsidio descargo y ofreció prueba, y por el otro dejó vencer los plazos legales fijados para su producción -e impidió que se realizara la pericial- y para alegar sobre su mérito, con lo cual rechazó ejercer su derecho de defensa en juicio (ver fs. 186).

2. La recurrente solicita, por vía de la queja, la nulidad absoluta de la resolución denegatoria de la apelación, como así también de todo lo actuado desde el 8-5-2003, oportunidad en la que se le confirió el traslado del art. 29 de la ley 25.156, por entender que la CNDC no tiene competencia para su dictado, de acuerdo con la doctrina fijada por la Corte Suprema en “Credit Suisse” y por

USO OFICIAL

esta Sala en las causas “AMX” (4537/10 del 10-12-2010), “SADAIC” (3839/10 del 21-12-2010) y “Fresenius” (10.507/09 del 13-5-2010).

Agrega que el pedido de nulidad absoluta alcanza a la Resol. CNDC N° 33/11 (del 28-4-2011) y, asimismo, la de todos los actos dictados con posterioridad por la Comisión, los cuales enumera a fs. 189vta., primer párrafo.

En subsidio, pide que se declare admisible el recurso de apelación y que se decrete la nulidad de todas las resoluciones dictadas a partir de la Resol. 78/10 (del 15-6-2010), mediante la cual se dio por concluida la instrucción sumarial y se ordenó el traslado del art. 32 de la LDC, habida cuenta de que no está firme por haber sido atacada por nulidad absoluta, como tampoco lo está la resolución que rechazó ese planteo. A ello añade, también en subsidio, que se declare la nulidad absoluta de la Resol. N° 66/11 (del 24-8-2011), por cuanto contradice la doctrina de la Corte Suprema en el sentido de que la prescripción de la acción penal debe ser resuelta por los jueces de la causa en forma previa a la decisión sobre el fondo (Fallos 330:4103 y 337:2273). Alega, en tal sentido, que la CNDC puso el expediente “en estado de dictarse resolución”, como si el planteo sobre la prescripción no existiese, a la vez que declaró la pérdida de derechos por una supuesta inactividad procesal, en contradicción a las normas que rigen el proceso penal, aplicables según el art. 56 de la LDC, las cuales “repelen toda idea de deber procesal de urgir prueba” (ver fs. 189vta./190vta.).

Después de efectuar una reseña de los antecedentes del caso (Ap. V, fs. 192/95vta.), critica el auto denegatorio del recurso. En lo sustancial, afirma que “si es aceptada la postura de mi parte acerca de la nulidad absoluta de la resolución primigenia ex art. 29 de la LDC estoy relevada de toda ulterior fundamentación porque el art. 172 del rito penal es inexorable”, y reitera la doctrina de Fallos 330:2527 en cuanto determina las decisiones cuyo dictado compete al Secretario y no a la Comisión. Añade que al no haber quedado firmes las resoluciones dictadas en los términos de los arts. 30 y 32 de la ley 25.156 desde que fueron impugnadas por su nulidad absoluta, no podían dictarse otras que dependían de su firmeza.

Sobre esa base, sostiene que es contrario a derecho el requerimiento de que se acredite un perjuicio o gravamen irreparable, puesto que ha planteado una nulidad absoluta que afecta garantías constitucionales. Y cita en apoyo de su

postura una resolución dictada por la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico en la causa “YPF” el 13 de abril de 2004.

3. De acuerdo con lo resuelto por este Tribunal el 13 de octubre de 2011 en las causas 2875/11, 3570/11 y 6302/11 -a cuyos fundamentos cabe remitirse para evitar nuevas reiteraciones sobre cuestiones ya planteadas y desestimadas-, este nuevo recurso de queja tampoco es admisible.

Y ello es así, puesto que la recurrente reitera, a fin de fundar la queja, los mismos argumentos que ya fueron rechazados en las citadas resoluciones -cuyas copias certificadas integran la presente-, en particular: los efectos que le asigna a la invocada nulidad de la resolución dictada por la CNDC en los términos del art. 29 de la ley 25.156, por carecer de competencia para ello según la doctrina de Fallos 330:2527 y 331:781; y la falta de firmeza de la Resol. N° 78/10.

4. A ello se debe añadir que la queja no contiene argumentación alguna para rebatir el fundamento sustancial con el que se denegó la apelación: esto es la limitación recursiva prevista en el art. 33 de la ley 25.156, norma que no ha sido cuestionada ni en su aplicación al supuesto en examen ni en su validez constitucional (*cfr. esta Sala, causa 9676/04 del 15-3-2005*). Es decir, carece de la mínima fundamentación que, por su carácter de recurso, es exigible para su admisión (*esta Sala, causas 3389/99 del 5-8-99, 7053/02 del 19-9-2002, 5660/04 del 5-8-2004; Sala 1, causa 3913/97 del 23-9-97, 1491/99 del 6-5-99 y 2616/01 del 10-5-2001; Sala 2, causa 2249/00 del 10-8-2000; entre otras*).

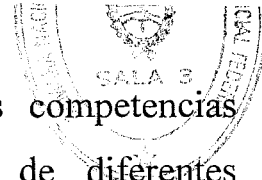
5. Si bien lo expuesto es suficiente para desestimar la queja deducida, cabe precisar en orden a la invocada falta de consideración de la prescripción que ha planteado la Asociación en las actuaciones sustanciadas ante la CNDC para cuestionar la prosecución de su trámite, que este Tribunal declaró la nulidad de la Resolución N° 17/10 dictada por ese órgano en el entendimiento de que carecía de competencia para ello, y dispuso su remisión para que el Secretario de Comercio Interior resolviese ese punto (causa 4798/10 del 14-9-2010). Contra dicha decisión el Estado Nacional interpuso recurso extraordinario, el cual fue concedido el 14 de junio de 2011 (ver, asimismo, resolución del 8-9-2011), habiéndose elevado esa causa a la Corte Suprema el 5 de octubre de 2011.

Empero, no se advierte que dicha circunstancia sea suficiente para admitir la queja que se deduce en esta oportunidad, habida cuenta de que si bien es cierto que no se puede considerar que exista un pronunciamiento firme acerca de la prescripción, también lo es que no se ha dictado una resolución definitiva respecto de la conducta investigada, en los términos del art. 46 de la ley 25.156. Y en tal situación no se advierte la alegada contradicción con el argumento ensayado por la recurrente en el sentido de que dicho planteo debe ser resuelto con anterioridad a la decisión final sobre la cuestión de fondo.

6. En cuanto al escrito de fs. 199/202 “PIDE URGENTE SUSPENSION – SOLICITA DICTAMINE SOBRE REMISION AL FUERO PENAL”, nada cabe decidir al respecto.

Ello es así, puesto que en dicha presentación se reiteran y añaden argumentos para fundar la queja deducida y cuestionar el trámite del expediente administrativo, con remisión a resoluciones dictadas por jueces de primera instancia en otros juicios a los que se aplican normas distintas a la que rigen en la especie, lo cual es manifiestamente improcedente. A lo cual se debe agregar que no corresponde a este Tribunal dictar un pronunciamiento para impedir “el dictado de una resolución de fondo sin que medie previamente resolución firme sobre el planteo de prescripción actualmente en trámite ante la Corte Nacional” (fs. 200), habida cuenta de que ello excede la jurisdicción recursiva que tiene con motivo de la presente queja (ver, por lo demás, considerando quinto de esta resolución).

Finalmente, hay que señalar que tampoco es procedente el pedido para que “se dictamine” sobre la remisión al fuero penal en virtud de lo dispuesto en el art. 177, inc. 1, del Código Procesal Penal (Ap. II, fs. 200vta.). Es que se debe entender -aunque ello no queda claro en el escrito- que la recurrente funda esa solicitud en la existencia de un delito de usurpación de autoridad (fs. 201, último párrafo) con motivo de que la CNDC: dictó resoluciones en contradicción con decisiones dictadas por este Tribunal y por la Corte Suprema en otras causas; se autocalificó como órgano jurisdiccional; y demostró hostilidad hacia su parte al denunciar a sus letradas ante el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados, circunstancias que, a juicio de esta Sala, no son suficientes para proceder de acuerdo con lo dispuesto en el citado art. 177, inc. 1, del Código



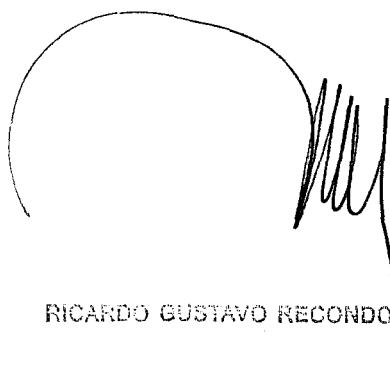
Procesal Penal. Ello es así, puesto que el deslinde de las competencias funcionales entre el Secretario y la CNDC fue motivo de diferentes pronunciamientos judiciales surgidos a partir de una situación compleja como ser la subsistencia de la autoridad de aplicación de la ley 22.262 para llevar adelante el procedimiento de investigación de conductas previsto en la ley 25.156, hasta tanto se constituya el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia (art. 58).

Tampoco en la remisión que dispuso la CNDC al Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados, de una copia de la presentación efectuada por las letradas de la Asociación, debido al tenor de los términos utilizados en ella, a fin de que esa entidad analice la conducta de acuerdo con su poder de policía de la matrícula de abogados (art. 2 de la Resol. 90/11 y su respectivo considerando), se advierte la comisión de un delito que deba ser denunciado en los términos del art. 177, inc. 1, del Código Procesal Penal.

Esto, sin perjuicio del derecho que le asiste a la Asociación o a las letradas para ocurrir por la vía que corresponda ante los tribunales competentes.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:** desestimar la queja deducida por la Asociación a fs. 189/97 y la presentación de fs. 199/202.

Regístrese -con copia certificada de las resoluciones dictadas en las causas 2875/11, 3570/11 y 6302/11 el 13 de octubre de 2011-, notifíquese a la recurrente, remítase copia de esta resolución a la CNDC mediante oficio y archívese.



RICARDO GUSTAVO RECONDO



GUILLERMO ALBERTO ANTELO



GRACIELA MEDINA